



REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY



Cámara de Representantes

Secretaría

**COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS,
LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN**

**REPARTIDO N° 650
MAYO DE 2022**

CARPETA N° 2489 DE 2022

**CERTIFICADO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES PARA
LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS POR PARTE DE INSTITUCIONES
PÚBLICAS O PRIVADAS DEL ÁREA EDUCATIVA, DE LA SALUD Y
DE AQUELLAS QUE IMPLIQUEN TRATO DIRECTO
CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA**

Se sustituye el artículo 1° de la Ley N° 19.791

XLIX Legislatura

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 19.791, de 30 de agosto de 2019, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1°. (Solicitud de información por parte de ciertas instituciones).- Toda institución pública o privada perteneciente al área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, deberán solicitar a la Dirección Nacional de Policía Científica que expidan un certificado informando si la persona a ser contratada tiene antecedentes judiciales por la comisión, en cualquier calidad, de los siguientes delitos:

- A) Violación (artículo 272 del Código Penal).
- B) Abuso sexual (artículo 272-BIS del Código Penal).
- C) Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272-TER del Código Penal).
- D) Atentado violento al pudor (artículo 273 del Código Penal).
- E) Abuso sexual sin contacto corporal (artículo 273-BIS del Código Penal).
- F) Corrupción (artículo 274 del Código Penal).
- G) Reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso (artículo 280 del Código Penal).
- H) Esclavitud sexual (artículo 280-BIS del Código Penal).
- I) Unión matrimonial o concubinaria forzada o servil (artículo 280-TER del Código Penal).
- J) Prostitución forzada (artículo 280-QUATER del Código Penal).
- K) Los consagrados en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004.
- L) Privación de Libertad (artículo 281 del Código Penal).
- M) Incapacidad Compulsiva (artículo 291 del Código Penal).
- N) Abandono de niños y de personas incapaces (artículo 329 del Código Penal).
- O) Omisión de Asistencia (artículo 332 del Código Penal).
- P) Abuso de la inferioridad psicológica de los menores y de los incapaces (artículo 350 del Código Penal).
- Q) Abuso de firma en blanco (artículo 352 del Código Penal).

Montevideo, 11 de mayo de 2022

SEBASTIÁN CAL
REPRESENTANTE POR MALDONADO
MARIO COLMAN
REPRESENTANTE POR COLONIA

ÁLVARO PERRONE CABRERA
REPRESENTANTE POR CANELONES
FERNANDA ARAÚJO
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
RODRIGO GOÑI REYES
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
DIEGO ECHEVERRÍA
REPRESENTANTE POR MALDONADO
SILVANA PÉREZ BONAVITA
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Envejecer es un proceso natural e inevitable, es parte del desarrollo biológico, e involucra factores físicos, psicológicos, emocionales y sociales.

Gracias a los avances médicos y el actual estilo de vida, existe una mayor esperanza de vida a nivel mundial, y Uruguay no es ajeno a ello. Los datos del Censo Nacional del 2011 muestran que el 14% de las personas tienen más de 64 años de edad, y dentro de ese conjunto, más de 500 personas superan los 100 años.

Pero lamentablemente, esta población sufre de exclusión, de discriminación por su edad, de prejuicios por su rol participativo en la sociedad, de violencia de sus propios familiares así como de las personas que están a su cargo, la cual se ha venido acentuando en los últimos años.

Desde el punto de vista normativo, existen varias leyes en nuestro país, referidas al Adulto Mayor, tales como:

- Ley N° 17.066 del año 1998, que dicta normas sobre condiciones mínimas exigibles a los efectos de la habilitación, las competencias de contralor y las posibles sanciones a las que están sujetos los establecimientos de cuidados para personas mayores, y en su artículo 2°, define como adulto mayor a todas las personas mayores de 65 años.

- Ley N° 18.241 que crea subsidios a personas entre los 65 a 70 años que presenten carencias críticas en sus condiciones de vida.

- Ley N° 18.395, la cual regula beneficios jubilatorios y flexibilizaciones de las condiciones de acceso, modificando la Ley 16.713.

- Ley N° 18.340, que regula el régimen de la vivienda para jubilados y pensionistas, cuya propiedad será del BPS y administrados por este.

- Ley N° 18.617, crea el Instituto Nacional del Adulto Mayor, quien tiene la labor de trabajar todos los aspectos referentes al grupo etario.

- Ley N° 19.353, crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, con el objetivo de promoción del desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia, su atención y asistencia.

- Ley N° 19.791, que fija medidas preventivas para instituciones que impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

Asimismo, se destaca La Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores aprobada en Uruguay por la Ley N° 19.430 del 8 de setiembre 2016, de cuyo preámbulo dejamos a texto expreso lo siguiente:

“Resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanen de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano;

Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades;

Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza;

Recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012)".

A su vez, en su Artículo 4, detalla que "Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor".

También en su Artículo 12 donde se relaciona que "Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:

a) Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de cuidado de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor.

b) Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar la condición existente..."

Frente a todo lo planteado, se puede dar cuenta que han existido grandes avances a nivel legislativo en cuanto a los adultos mayores, pero es necesario seguir en ese mismo lineamiento y ahondar en su protección.

Es así que consideramos fundamental apuntar al cuidado del Adulto Mayor, implementando los mecanismos necesarios para que tengan una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar la condición existente, justamente de aquellas personas que estén en contacto directo con ese grupo etario tan vulnerable.

Apuntar a la prevención, es fundamental y existe un mecanismo brindado por la Ley 19.791, donde está establecido que toda institución pública o privada perteneciente al área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, deberán solicitar a la Dirección Nacional de Policía Científica que expidan

un certificado informando si la persona a ser contratada tiene antecedentes judiciales por la comisión, en cualquier calidad, de los delitos, principalmente sexuales, detallados en la norma.

Atento a ello, resulta conveniente, efectivo, y de una economía administrativa a destacar, que todas las Instituciones de Salud Públicas o Privadas, así como Residenciales, o Sistema de Cuidado, por nombrar algunos de ellos, tomen recaudos al momento de contratar o seleccionar una persona que va a estar al cuidado de un adulto mayor, y extender el listado de delitos, apuntando al adulto mayor y su situación de vulnerabilidad, donde es víctima de delitos tales como privación de libertad, incapacidad compulsiva (sin motivo legítimo, colocar a otro sin su consentimiento en un estado letárgico) abandono y omisión de asistencia. Estos últimos se encuentran con frecuencia en sentencias dictadas en nuestro país y cuyas víctimas son adultos mayores.

No podemos seguir desconociendo estas situaciones, al contrario tenemos que buscar las medidas necesarias de protección, para que las personas que vayan a acompañar, asistir, cuidar, a ese adulto mayor no tengan antecedentes penales de esas características.

Por lo cual, al incluir estos delitos penales y su información mediante el “certificado de antecedentes judiciales según la Ley N° 19.791”, estamos previniendo, protegiendo y garantizando que quien asista, cuide, acompañe al adulto mayor, no posea antecedentes penales de esa envergadura .

Es preciso acotar, que si los adultos mayores conocen que hay un sistema que los cuida, que somete a un estricto control, el ingreso de las personas que van a estar en contacto con ellos, sea acompañando, asistiendo o cuidando, no solo se van a sentir más tranquilos, sino que van a promover que también ellos denuncien, si son víctimas de delitos, porque contribuyen a sanear el sistema de protección de las personas en contacto con adultos mayores.

Por todo lo expuesto, como legisladores, debemos generar las condiciones legislativas necesarias, para que los adultos mayores puedan envejecer con dignidad, seguridad, plenitud, disfrutando de todas sus libertades y gozando de sus derechos, y este tipo de modificaciones es una de ellas.

Montevideo, 11 de mayo de 2022

SEBASTIÁN CAL

REPRESENTANTE POR MALDONADO

MARIO COLMAN

REPRESENTANTE POR COLONIA

ÁLVARO PERRONE CABRERA

REPRESENTANTE POR CANELONES

RODRIGO GOÑI REYES

REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO

FERNANDA ARAÚJO

REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO

DIEGO ECHEVERRÍA

REPRESENTANTE POR MALDONADO

SILVANA PÉREZ BONAVITA

REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO

≠